

Jacques Delors fue uno de los principales sepultureros de la izquierda en Francia y en Europa

Por: Aurélie Dianara. 12/02/2024

En el funeral de Jacques Delors la semana pasada, el antiguo presidente de la Comisión Europea fue aclamado como el arquitecto de izquierdas de la Unión Europea. Pero lejos de las esperanzas de una “Europa social” que la izquierda había formado en los años 70, y que los social-liberales siguen ilusoriamente planteando, Delors construyó en los años 90 un nuevo orden europeo sometido a los dogmas neoliberales de la mercantilización y la privatización.

El pasado viernes, Emmanuel Macron presidió una ceremonia de homenaje nacional de alto nivel a Jacques Delors, antiguo ministro de Economía de 1981 a 1984 y presidente de la Comisión Europea de 1985 a 1995. Los Jefes de Estado de todos los países de la Unión Europea (UE) fueron invitados a unirse a Macron y a los dirigentes de las instituciones europeas para rendir homenaje a Jacques Delors, fallecido la semana anterior a la edad de 98 años. Desde su muerte, el antiguo Presidente de la Comisión ha sido ampliamente aclamado como “visionario”, “arquitecto” e incluso “padre” de la UE.

Tanto en la izquierda como en la derecha, las élites políticas francesas y europeas [han saludado unánimemente](#) el compromiso de Delors con Europa. También se le considera una de las figuras más importantes de la izquierda de la V República. Sin embargo, si se examina más de cerca y más allá de la veneración ocasional, surge una imagen completamente diferente. De hecho, Delors fue uno de los principales protagonistas del abandono del programa socialista francés tras la llegada de la izquierda al poder en 1981, y de la defraudación de las esperanzas de la izquierda europea de una “Europa social” unos años más tarde.

Delors y el giro liberal del socialismo francés

De hecho, Delors desempeñó un papel clave en el giro liberal de la izquierda francesa. En resumen, fue un socialdemócrata reformista que surfeó la ola radical de los años 70 antes de abrazar ingenuamente el liberalismo económico.

Tras licenciarse en Derecho en 1945 a la edad de 20 años, Delors comenzó su carrera en la Banque de France y se afilió al sindicato Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). En sus filas, formó parte del movimiento de izquierdas (antimarxista) “Reconstrucción”, que abogaba por un sindicalismo socialista y democrático. Aunque apoyó la desconfesionalización de la CFTC y su transformación en la actual Confédération française démocratique du travail (CFDT), siempre ha seguido siendo un católico social convencido, [inspirado por las ideas del personalismo](#), movimiento intelectual que se desarrolló principalmente en Francia en los años 30 y que buscaba una “tercera vía” entre el capitalismo liberal y el colectivismo socialista.

Trabajó en el Commissariat Général au Plan en los años sesenta, y en 1969 se convirtió en asesor del gabinete del nuevo Primer Ministro gaullista de Georges Pompidou, Jacques Chaban-Delmas, a quien ayudó a lanzar un programa de “nueva sociedad”. Aunque la prioridad de este gobierno era aumentar el crecimiento y la competitividad económica, y a pesar de una ley “contra la delincuencia” especialmente represiva tras Mayo del 68, esta política de “nueva sociedad” mostró nuevas preocupaciones progresistas por el diálogo social, la formación profesional, la educación, los derechos de la mujer y el aumento del salario mínimo.

Esta temprana carrera como asesor en un gobierno de derechas no impidió a Delors afiliarse en 1974 al Partido Socialista (PS), partido que acababa de reorganizar las fuerzas del socialismo francés bajo el liderazgo de François Mitterrand. Fue una elección bastante natural para un antiguo miembro de la CFDT. Varias figuras importantes de la CFDT y del ala derecha del Parti Socialiste Unifié (PSU), como Jacques Chérèque y Michel Rocard, se unieron al PS en 1974, después de que Mitterrand obtuviera el 49,2% de los votos en las elecciones presidenciales de ese año.

En aquella época, la CFDT y el PSU encarnaban la “segunda izquierda” que había surgido en Francia desde finales de los años 50 en oposición a la represión soviética del levantamiento de Budapest de 1956, la guerra de Argelia y el golpe de Estado de De Gaulle en 1958. A finales de los años sesenta, esta segunda izquierda -que agrupaba a socialcatólicos, socialdemócratas y humanistas, así como a trotskistas y maoístas- abogaba por un socialismo descentralizado y autogestionario. En los años 70, bajo la influencia de 1968 y de la Segunda Izquierda, [los socialistas franceses](#) y la mayoría de la izquierda se unieron en torno a este objetivo.

Fue también el periodo en que los socialistas adoptaron un programa de gobierno conjunto con el Partido Comunista Francés (PCF) y abogaron por la ruptura con el capitalismo. En el primer congreso del PS, celebrado en Épinay en junio de 1971, Mitterrand quiso reforzar su credibilidad radical lanzando una [advertencia](#): “Quien no acepte la ruptura... con la sociedad capitalista no puede ser miembro del Partido Socialista”.

En este contexto, Delors, que llegó a ser delegado nacional del partido para las relaciones económicas internacionales (1976-1981), no abogó por la austeridad y el liberalismo económico. En 1976, [declaró en el programa Apostrophe](#) que su concepción de la socialdemocracia significaba “romper con el capitalismo, la nacionalización, la autogestión y la erradicación de la sociedad meritocrática”.

Ese mismo año, participó en una conferencia sobre la crisis de la planificación capitalista organizada en la Universidad de Sussex por Stuart Holland, uno de los principales promotores de la Estrategia Económica Alternativa radical del entonces Partido Laborista. Esta conferencia dio lugar a la publicación de un libro hoy olvidado, *Beyond Capitalist Planning* (Más allá de la planificación capitalista), en el que Delors y sus colegas defendían una estrategia para superar el tipo de “capitalismo regulado” que había caracterizado la posguerra, reforzando el control estatal sobre las grandes empresas y ampliando la propiedad pública sobre la base de una “planificación socialista”, con una mayor democracia industrial y económica.

Tras la victoria de la izquierda en Francia en mayo de 1981, cuando, después de veintitrés años de gobierno de derechas, Mitterrand fue elegido Presidente y tomó posesión un gabinete socialista -al que se unieron en junio cuatro ministros comunistas-, Delors fue nombrado Ministro de Economía y Hacienda. Inmediatamente después de su elección, el nuevo ejecutivo dirigido por Pierre

Mauroy adoptó una serie de importantes reformas sociales y económicas.

Éstas iban desde la amplia nacionalización de la industria y la banca hasta la contratación masiva en el sector público, pasando por el aumento del salario mínimo y las pensiones, el incremento de los subsidios familiares y la ampliación del acceso a las prestaciones del seguro de enfermedad, el aumento de las prestaciones para los desempleados y los trabajadores a tiempo parcial, el incremento de los subsidios de vivienda y las prestaciones para los discapacitados, y la reducción de la jornada laboral (de cuarenta a treinta y nueve horas semanales, con el objetivo de llegar pronto a las treinta y cinco horas). También se introducirá una quinta semana anual de vacaciones pagadas, se aumentará la protección de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, se despenalizará la homosexualidad y se abolirá la pena de muerte.

Al mismo tiempo, el gobierno lanzó un vasto plan keynesiano de recuperación para estimular el crecimiento y el empleo. El coste de estas medidas se cubrió en gran parte con la introducción de una fiscalidad más progresiva, un impuesto sobre el patrimonio y controles más estrictos de la evasión fiscal. Las leyes Auroux de 1982 también introdujeron una mayor democracia industrial (aunque la “autogestión” seguía siendo un sueño lejano), al tiempo que se descentralizaba el poder hacia las regiones, los departamentos y las comunas. Todo ello iba claramente en contra de la nueva ola neoliberal que recorría Occidente bajo el liderazgo de Donald Reagan y Margaret Thatcher.

El nuevo gobierno francés era muy consciente de las limitaciones que imponía a sus planes nacionales la interdependencia de las economías europea (y mundial) y de la Comunidad Europea (CE, precursora de la Unión Europea). La situación era aún más crítica por el hecho de que los principales socios comerciales del país, empezando por la Alemania Occidental de Helmut Schmidt, estaban adoptando políticas de austeridad deflacionistas que contrastaban fuertemente con sus ambiciones. Además, el Sistema Monetario Europeo (SME), creado en marzo de 1979, vinculaba las monedas europeas a la divisa más fuerte, el Deutschemark, e introducía una restricción monetaria que orientaba a los países europeos hacia la “estabilidad” económica y las políticas antiinflacionistas -restricción del gasto público, contención salarial, tipos de interés elevados- en lugar de hacia el pleno empleo o la redistribución.

El 11 de junio de 1981, en una reunión conjunta de los ministros europeos de Finanzas y Asuntos Sociales, Jacques Delors pidió un plan de recuperación

concertado a escala de la Comunidad Europea, mientras que Jean Auroux, Ministro de Trabajo, pidió medidas radicales para combatir el desempleo, en particular una reducción de la jornada laboral a escala de la CE. Sin embargo, las propuestas presentadas y reiteradas por el gobierno francés en los meses siguientes no lograron convencer a sus socios europeos. Desde la segunda crisis del petróleo en 1979, Schmidt había optado cada vez más por la austeridad en su política interior, opción confirmada por su sucesor Helmut Kohl a partir de 1982. En Gran Bretaña, la “Dama de Hierro” impuso la austeridad presupuestaria, la desregulación, la flexibilización del mercado laboral, la privatización de empresas públicas y la reducción del poder y la influencia de los sindicatos.

Obligada a proseguir sola su política de recuperación, Francia se ve sumida en crecientes dificultades macroeconómicas: aumento de la inflación, incremento del déficit comercial y presupuestario. Sobre todo, el país tuvo que hacer frente a la fuga de capitales, la especulación monetaria y la hostilidad de las comunidades empresarial y financiera. En Estados Unidos, las políticas deflacionistas promovidas desde 1979 por el Banco Federal contribuyeron a una recesión mundial a principios de los 80, que no hizo sino agravar la situación del gobierno francés dirigido por el Partido Socialista. Todo ello, y en particular los elevados tipos de interés de los mercados internacionales, dificultaron cada vez más la financiación del Estado. Por ello se devaluó el franco en octubre de 1981 y en junio de 1982. Con cada devaluación aumentaba la deuda exterior de Francia. Ante la obstinada negativa de los principales gobiernos europeos a una recuperación europea coordinada, y frente a la continua presión a la baja sobre su moneda, el gobierno francés no podía permanecer mucho tiempo en el SME sin cambiar de rumbo. En este contexto, Delors empezó a reclamar una mayor austeridad presupuestaria y una “pausa” en las reformas sociales a finales de 1981.

En marzo de 1983, tras una tercera devaluación, el gobierno francés tuvo que elegir entre mantener el programa por el que había sido elegido, lo que implicaba salir del SME, o lo contrario. Optó por abandonar sus esfuerzos por “cambiar la vida” (lema de campaña de Mitterrand en 1981) y se embarcó en un cambio radical de política económica: recurso a la deflación, restricciones presupuestarias, vuelta atrás de las nacionalizaciones, abandono de la indexación salarial y la reducción de la jornada laboral, y desregulación financiera gradual. En 1984, los comunistas abandonan el gobierno. Este “giro de austeridad”, que se convertiría en un trauma en la memoria colectiva de la izquierda francesa, se emprendió en nombre de Europa y bajo la influencia y el liderazgo decisivos de Delors.

El “momento” Delors

Abandonando el “socialismo a la francesa”, el gobierno francés optó por reafirmar su compromiso con Europa. El nombramiento de Delors como Presidente de la Comisión Europea a partir de 1985 encarnó esta nueva estrategia. Como principal artífice del giro francés hacia la austeridad y la perseverancia con el SME, Delors se había ganado un amplio apoyo entre las élites políticas europeas. Según Thatcher, era “extremadamente inteligente y enérgico y se le atribuía el mérito de haber invertido las primeras políticas socialistas de izquierdas del gobierno del Presidente Mitterrand y de haber saneado las finanzas francesas”.

Al tiempo que se ganaba la confianza de los conservadores neoliberales, Delors era también un católico social aceptable para los democristianos, se había ganado la confianza del Canciller de Alemania Occidental, Helmut Kohl, y conocía bien la jerga burocrática europea (había sido diputado al Parlamento Europeo y había participado en los trabajos de la Confederación de Partidos Socialistas en la Comunidad Europea).

Los tres mandatos de Delors al frente de la Comisión suelen etiquetarse hoy como el “momento Delors”: un periodo de dinamismo político único para “Europa”, con el establecimiento del mercado único, la firma de los acuerdos de Schengen sobre circulación transfronteriza, la creación del programa Erasmus de intercambio de estudiantes, el lanzamiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM) que desembocó en la creación del euro, etcétera. También se suele presentar a Delors como el “padre indiscutible de la Europa social”, por haber allanado el camino para la institucionalización del “diálogo social europeo”, el refuerzo de los fondos sociales

y de cohesión europeos y el aumento progresivo de las competencias y la reglamentación europeas en el ámbito social.

De hecho, nada más tomar posesión de su cargo en enero de 1985, el nuevo Presidente de la Comisión situó inmediatamente la liberalización económica y el proyecto de mercado único en el primer lugar de su agenda. Fue una elección consensuada, como explicó el propio Delors unos años más tarde: “Tuve que recurrir a un objetivo pragmático que también correspondía al espíritu de la época, ya que entonces se trataba de desregular, de eliminar todos los obstáculos a la competencia y a las fuerzas del mercado”. La realización del mercado interior de la CE, con la supresión de los últimos obstáculos a las “cuatro libertades” – la libre circulación de mercancías, capitales, servicios y personas – contaba, por supuesto, con el firme apoyo de Kohl y Thatcher. El nuevo Comisario británico para el Mercado Interior y los Servicios, Arthur Cockfield, que había ocupado cargos económicos en los gobiernos de Thatcher, desempeñó un papel clave a la hora de sentar las bases del proyecto.

La presión de diversos grupos de presión empresariales desempeñó un papel decisivo en la remodelación de la integración europea a partir de mediados de los años ochenta. En 1983, a iniciativa de Pehr Gyllenhammar, Director General de Volvo, los dirigentes de diecisiete grandes empresas transnacionales europeas - entre ellas Volvo, Philips, Fiat, Nestlé, Shell, Siemens, Thyssens, Lafarge, Saint Gobin y Renault- se reunieron en París para fundar la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT). Su objetivo era promover una mayor apertura de los mercados y el apoyo europeo a la industria. El Libro Blanco de la Comisión de 1985 sobre la realización del mercado interior, que proponía unas 300 medidas para completar el mercado único de aquí a 1992 mediante la supresión de las barreras no arancelarias, era muy similar a las recomendaciones de la ERT.

La lógica del programa del mercado interior, institucionalizado por el Acta Única Europea de 1986, estaba por tanto fuertemente orientada al mercado. Lejos del tipo de “planificación socialista” promovida por Delors y sus colegas socialistas unos años antes, su objetivo era construir un mercado más amplio mediante la liberalización y armonización de las normas comerciales. Delors, como otros socialistas en estrecho contacto con la comunidad empresarial europea, había llegado a creer que las tendencias hacia la liberalización del comercio y la desregulación bancaria y financiera eran inevitables y esenciales para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, e incluso para restablecer a Europa

Occidental como actor económico de primer orden en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. En los años siguientes se adoptaron directivas cruciales sobre la liberalización de los movimientos de capitales y la desregulación de los sectores bancario y de seguros, transportes y energía, entre otros.

¿No vieron Delors y sus colegas que el desencadenamiento del comercio, la liberalización de los servicios y la libre circulación de capitales dentro de la Comunidad Europea, sin una armonización fiscal y social previa, enfrentarían inevitablemente a los trabajadores y a los regímenes nacionales de bienestar, provocando una carrera a la baja en materia de derechos sociales, salarios y redistribución? Esta sigue siendo quizá la pregunta más inquietante, porque durante los largos años setenta, los socialistas europeos hablaron mucho de armonización social y fiscal al alza y de un mayor control de los movimientos de capital y de las empresas multinacionales, no de desregulación.

De hecho, la administración Delors adoptó lo que algunos de sus miembros llamaron una estrategia de “muñeca rusa”: una especie de dominó en el que cada paso adelante estaba diseñado para dar impulso al siguiente. La Comisión esperaba “recuperar” el éxito del programa del mercado único mediante nuevas iniciativas: el Paquete Delors, destinado a duplicar el presupuesto comunitario y los Fondos Estructurales para reforzar la “cohesión económica y social”; la UEM y la creación de una moneda única; y la “dimensión social” con la adopción de una carta social, un programa de acción social y el relanzamiento de un “diálogo social europeo”. En resumen, Delors veía el mercado único como un paso hacia una unión más estrecha; la integración impulsada por el mercado conduciría entonces naturalmente a su vez a correcciones sociales y fiscales.

Lamentablemente, no todos los aspectos de este proceso han tenido el mismo éxito; la consolidación de un “modelo social europeo”, que se suponía debía seguir necesariamente al fortalecimiento del mercado, se ha quedado rezagada. El paquete Delors se adoptó tras unas agrias negociaciones, duplicando los Fondos Estructurales y limitando al mismo tiempo el presupuesto de la Política Agrícola Común, pero el presupuesto global de la CE – y, por tanto, su potencial de redistribución social y regional – siguió siendo extremadamente limitado, superando raramente el 1% del PIB europeo.

El diálogo social relanzado en 1985 con los debates de Val Duchesse entre empresarios, sindicatos y asociaciones del sector público ha dado muy pocos

resultados. La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, adoptada en 1989, proclamaba una serie de derechos sociales y económicos – igualdad de trato entre hombres y mujeres, libertad de asociación y negociación colectiva, derecho a una retribución y una protección dignas -, pero no era vinculante. El programa de acción social adoptado en 1989 para aplicar la Carta incluía cuarenta y siete instrumentos (frente a los casi 300 del programa del mercado único), la mayoría de los cuales eran “recomendaciones” y “dictámenes” no vinculantes, por ejemplo sobre el salario mínimo.

En cambio, la unión monetaria fue el mayor éxito político de Delors. En 1988, el Consejo Europeo designó a Delors para presidir un comité formado en gran parte por banqueros centrales europeos, encargado de hacer nuevas propuestas para la realización de la UEM. Las reticencias iniciales del gobierno alemán a abandonar el todopoderoso marco alemán se habían visto suavizadas por el compromiso del gobierno francés de aceptar la libre circulación de capitales y por la garantía de que el futuro Banco Central Europeo supranacional seguiría el modelo del Bundesbank, es decir, que sería independiente de los poderes políticos y se centraría principalmente en la “estabilidad de precios”. El Informe Delors, publicado y aprobado por los gobiernos europeos en la primavera de 1989, sentó las bases de la unión monetaria, que más tarde se consagró en el Tratado de Maastricht firmado en 1992.

El núcleo de este nuevo tratado era el compromiso de los Estados miembros, con excepción del Reino Unido y Dinamarca, de adoptar una moneda única bajo la autoridad de un banco central único e independiente antes del año 2000. Esta decisión no fue insignificante. Más aún que en el SME, significaba que los gobiernos europeos renunciarían a aspectos esenciales de su soberanía económica y monetaria nacional, empezando por su derecho a emitir dinero y modificar los tipos de cambio.

El Tratado también introdujo por primera vez los “criterios de convergencia”, que establecían normas obligatorias para las políticas económicas de los Estados miembros: limitar los déficits presupuestarios al 3% del PIB y la deuda pública al 60% del PIB, mantener las tasas de inflación no más de 1,5 puntos porcentuales por encima de las de los países “con mejores resultados”, estabilidad de los tipos de cambio y respeto de la convergencia de los tipos de interés. Muy a pesar de Delors, los negociadores de Maastricht se negaron a incluir criterios de convergencia sobre los niveles de empleo.

Mientras tanto, la “dimensión social” prometida a los sindicatos quedó en gran medida en mera apariencia. El acuerdo sobre política social anexo al Tratado de Maastricht añadió muy poco a las competencias europeas en el ámbito social, y no hizo nada para contrarrestar la constitucionalización del neoliberalismo en el corazón de la nueva Unión Europea. Un protocolo social incluido en el tratado institucionalizó un nuevo “diálogo social europeo” para que empresarios, sindicatos y la Comisión acordaran directrices de política social, pero dada la reticencia de los empresarios y la falta de presión de las instituciones de la UE, los Estados miembros y la sociedad civil, era poco probable que produjera resultados significativos. De hecho, entre 1995 y 2013, solo se adoptaron tres directivas por el procedimiento de protocolo: sobre el permiso parental, el trabajo a tiempo parcial y el trabajo de duración determinada.

Cuando la Comisión Delors llegó a su fin en 1995, “Europa” -cada vez más encarnada por una UE en expansión- se alejaba cada vez más de la “Europa social” que los socialistas y los sindicatos habían promovido durante los largos años setenta. Lejos de una Europa democratizada al servicio de los trabajadores, controlando los mercados, redistribuyendo la riqueza y orientada hacia la planificación económica, surgió una Europa cada vez más neoliberal, siendo la promoción de lógicas de mercado y de competencia claramente incompatibles con una “Europa social”.

En otras palabras, Delors no sólo fue uno de los principales sepultureros del experimento socialista francés, cambiando de paso el rumbo de la izquierda francesa. También contribuyó a dar forma a la Europa que conocemos: una maquinaria burocrática, autoritaria y neoliberal.

[Aurélie Dianara](#)

investigadora en el Laboratoire IDHES, Université d'Évry Paris-Saclay, y miembro del proyecto financiado por la ANR-DFG " 'Workplace democracy: a European ideal?: discourses and practices about the democratization of work after 1945' ". Antes de llegar a Évry, realizó su doctorado en Historia y Civilización en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, fue profesora ayudante en la Universidad París Sorbona y ocupó un puesto de investigadora asociada en la Universidad de Glasgow. Sus investigaciones se centran principalmente en la historia de la integración europea y la historia del socialismo y el sindicalismo en Europa. Recientemente ha publicado el libro *Social Europe, the Road not Taken: The Left and European Integration in the Long 1970s*.

[LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ](#)

Fotografía: Sin permiso

Fecha de creación

2024/02/12